



Asamblea General

Distr. general
19 de diciembre de 2022
Español
Original: inglés

Comité Especial encargado de Elaborar una Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos

Quinto período de sesiones

Viena, 11 a 21 de abril de 2023

Documento de negociación consolidado sobre el preámbulo, las disposiciones sobre cooperación internacional, medidas preventivas, asistencia técnica y el mecanismo de aplicación y las disposiciones finales de una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos

Nota de la Presidenta

1. Como preparación para el quinto período de sesiones del Comité Especial encargado de Elaborar una Convención Internacional Integral sobre la Lucha contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos y en consonancia con la hoja de ruta y modo de trabajo del Comité Especial, aprobados en su primer período de sesiones, la Presidenta del Comité ha redactado, con el apoyo de la Secretaría, un documento de negociación consolidado elaborado sobre la base de los resultados de la primera lectura del preámbulo, las disposiciones sobre cooperación internacional, medidas preventivas, asistencia técnica y el mecanismo de aplicación y las disposiciones finales del proyecto de convención (véase el anexo).

2. Más concretamente, el documento de negociación consolidado se basa en diversos elementos de las propuestas de los Estados Miembros recopiladas en los documentos [A/AC.291/12](#), [A/AC.291/12/Add.1](#), [A/AC.291/12/Add.2](#), [A/AC.291/12/Add.3](#) y [A/AC.291/12/Add.4](#), así como en las declaraciones y opiniones expresadas por los Estados Miembros durante el tercer período de sesiones. Se ha intentado proponer para cada disposición una opción con elementos tomados de diferentes propuestas o declaraciones. Se han utilizado corchetes para algunos términos con el fin de reflejar las opiniones divergentes sobre su empleo expresadas por algunos Estados Miembros en los períodos de sesiones del Comité Especial.

3. El primero de estos documentos de negociación consolidados ([A/AC.291/16](#), anexo) se había preparado previamente sobre la base de los resultados de la primera lectura de las disposiciones generales y las disposiciones sobre criminalización y sobre las medidas procesales y la aplicación de la ley de la futura convención, realizada por el Comité Especial en su segundo período de sesiones, y se puso a disposición del Comité para su examen antes de su cuarto período de sesiones.



Anexo

Documento de negociación consolidado sobre el preámbulo, las disposiciones sobre cooperación internacional, medidas preventivas, asistencia técnica y el mecanismo de aplicación y las disposiciones finales de una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos

Preámbulo

Los Estados partes en la presente Convención,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el cometido de las Naciones Unidas de armonizar los esfuerzos de las naciones para lograr esos propósitos y cumplir esos principios,

Preocupados por los efectos negativos sobre el desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos causados por la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], que socava las instituciones y los valores democráticos, así como la justicia, y afecta negativamente al estado de derecho, y por la creciente vulnerabilidad de los Estados ante dicha delincuencia,

Preocupados también por el aumento de la tasa y la diversidad de los delitos cometidos en el entorno digital y sus efectos en la estabilidad de la infraestructura crítica de los Estados y las empresas y en el bienestar de las personas y la sociedad en su conjunto,

Observando con profunda preocupación los crecientes vínculos entre la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y la delincuencia organizada transnacional,

Observando con aprecio la labor anterior, los resultados y las recomendaciones del Grupo de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético, de carácter intergubernamental y de composición abierta,

Convencidos de la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política penal común con objeto de proteger a la sociedad frente a la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], entre otras cosas promulgando legislación adecuada y fomentando la cooperación internacional,

Convencidos también de que la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] constituye un delito transnacional, lo que demuestra, por tanto, la urgente necesidad de reforzar la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente este tipo de delincuencia en los planos nacional, regional e internacional,

Destacando la necesidad de mejorar la coordinación y la cooperación entre Estados en la prevención y la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], entre otras cosas mediante el suministro de asistencia técnica y fomento de la capacidad a los países, en particular los países en desarrollo, que lo soliciten para mejorar la legislación y los marcos nacionales y para mejorar la capacidad de las autoridades nacionales para afrontar este tipo de delincuencia en todas sus formas, mediante su prevención, su detección, su investigación y su enjuiciamiento, y poniendo de relieve en este contexto la función que desempeñan las Naciones Unidas, en particular la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal,

Reconociendo el creciente número de víctimas de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y la importancia de obtener justicia para esas víctimas,

Determinados a fomentar un ciberespacio abierto, seguro, estable, accesible y pacífico para todos, en el que se promueva la aplicación del derecho internacional y el respeto de las libertades fundamentales y se protejan los derechos humanos,

Decididos a prevenir, detectar y reprimir más eficazmente las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente como consecuencia de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de bienes,

Reconociendo los principios de soberanía, igualdad soberana e integridad territorial de los Estados,

Reconociendo también la necesidad de cooperación entre los Estados y la sociedad civil, el mundo académico y la industria privada en la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y la necesidad de proteger los intereses legítimos en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información,

Convencidos de que la presente Convención es necesaria para prevenir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], ya que dispone la criminalización de dichos actos, definidos en la presente Convención, y la asunción de facultades suficientes para luchar eficazmente contra esos delitos, facilitando su detección, investigación y enjuiciamiento, tanto a nivel nacional como internacional, y estableciendo disposiciones que permitan una cooperación internacional rápida y fiable,

Teniendo presente la necesidad de garantizar el debido equilibrio entre los intereses de la acción penal y el respeto de los derechos humanos consagrados en las convenciones, los convenios y los tratados internacionales y regionales de derechos humanos aplicables, que reafirman el derecho de toda persona a defender la propia opinión sin interferencia, así como el derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de buscar, obtener y comunicar información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, y los derechos vinculados al respeto de la privacidad,

Teniendo presente también el derecho a la protección de los datos personales para ayudar a las personas a ejercer control sobre la información relativa a ellas que otros puedan reunir y utilizar ilícitamente,

Teniendo en cuenta los convenios y las convenciones internacionales y regionales existentes sobre cooperación en materia penal, así como otros tratados similares celebrados entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas,

Han convenido en lo siguiente:

[...]

Capítulo IV

Cooperación internacional

GRUPO TEMÁTICO 1

Artículo 56. Principios generales de la cooperación internacional

1. Los Estados partes cooperarán en la mayor medida posible, de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo, con otros instrumentos internacionales relativos a la cooperación internacional en materia penal y con los acuerdos concertados sobre la base del principio de reciprocidad, así como el derecho interno, con miras a prevenir, detectar, obstaculizar, investigar, perseguir y enjuiciar los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y a reunir, obtener, preservar y transmitir pruebas en forma

electrónica de [los delitos enunciados en la presente Convención] [cualquier delito] [delitos graves].

2. Los Estados partes considerarán la posibilidad de prestarse asistencia recíproca en las investigaciones y actuaciones en materia civil y administrativa relacionadas con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, según proceda y lo permitan sus ordenamientos jurídicos internos.

3. En cuestiones de cooperación internacional, cuando la doble incriminación sea un requisito, este se considerará cumplido si la conducta constitutiva del delito respecto del cual se solicita asistencia es delito con arreglo a la legislación de ambos Estados partes, independientemente de si las leyes del Estado parte requerido incluyen el delito en la misma categoría o lo denominan con la misma terminología que el Estado parte requirente.

4. Las facultades y procedimientos previstos en el presente capítulo estarán sujetos a las condiciones y garantías previstas en el artículo 42.

Artículo 57. Protección de datos personales

1. Los datos personales transmitidos de un Estado parte a otro Estado parte mediante una solicitud formulada de conformidad con la presente Convención únicamente podrán ser utilizados por el Estado parte al que se transmitan los datos con fines de actuaciones penales, administrativas o civiles u otros procedimientos judiciales o administrativos directamente relacionados con esas actuaciones, así como para prevenir una amenaza inminente y grave para la seguridad pública de las personas cuyos datos personales se transmitan.

2. El Estado parte requirente informará al Estado parte requerido del período por el que se necesiten los datos. El Estado parte requerido deberá dar su consentimiento a dicho período. Los datos transferidos no se conservarán durante más tiempo del necesario para los fines para los que se han recibido y se devolverán al Estado parte requerido o se eliminarán o destruirán al final del período establecido. El Estado parte requirente informará con antelación al Estado parte requerido en caso de que sea necesario conservar los datos en el Estado parte requirente durante un período más largo.

3. Los Estados partes adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los datos que se les transfieran estén protegidos de toda destrucción accidental o no autorizada, toda pérdida accidental o todo acceso, modificación o difusión no autorizados.

4. Las partes mantendrán un registro de los datos transferidos y de su destrucción.

5. Los datos personales no se comunicarán a terceros sin el consentimiento previo por escrito del Estado parte que haya transmitido los datos o de la persona a la que estos se refieren.

6. Un Estado parte que transmita datos personales en virtud de una solicitud formulada con arreglo a la presente Convención podrá exigir al Estado parte al que se hayan transmitido los datos que facilite información sobre su uso.

GRUPO TEMÁTICO 2

Artículo 58. Extradición

1. a) El presente artículo se aplicará a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención en el caso de que la persona que es objeto de la solicitud de extradición se encuentre en el territorio del Estado parte requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la extradición sea punible con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente y del Estado parte requerido con una privación de libertad máxima de al menos un año;

b) Cuando deba aplicarse una pena mínima diferente en virtud de un acuerdo basado en legislación uniforme o recíproca o de un tratado de extradición aplicable entre dos o más partes, se aplicará la pena mínima prevista en dicho tratado o acuerdo.

2. Sin perjuicio del párrafo 1 del presente artículo, los Estados partes cuya legislación lo permita podrán conceder la extradición de una persona por cualesquiera de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que no sean punibles de conformidad con su propio derecho interno.
3. Cuando la solicitud de extradición incluya varios delitos distintos, de los cuales al menos uno dé lugar a extradición conforme a lo dispuesto en el presente artículo y algunos no den lugar a extradición debido al período de privación de libertad que conllevan pero guarden relación con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, el Estado parte requerido podrá aplicar el presente artículo también respecto de esos delitos.
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre los Estados partes. Estos se comprometen a incluir tales delitos como causa de extradición en todo tratado de extradición que celebren entre sí. Los Estados partes cuya legislación lo permita, en el caso de que la presente Convención sirva de base para la extradición, no considerarán de carácter político ninguno de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
5. Si un Estado parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
6. Los Estados partes que supediten la extradición a la existencia de un tratado deberán:
 - a) en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, informar al Secretario General de las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición en sus relaciones con otros Estados partes en la presente Convención; y
 - b) si no consideran la presente Convención como la base jurídica de la cooperación en materia de extradición, esforzarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición con otros Estados partes en la presente Convención a fin de aplicar el presente artículo.
7. Los Estados partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como causa de extradición entre ellos.
8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras cosas, las relativas a los motivos por los que el Estado parte requerido puede denegar la extradición.
9. Los Estados partes, de conformidad con su derecho interno, procurarán agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios correspondientes con respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo.
10. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición, el Estado parte requerido podrá, tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado parte requirente, proceder a la detención de la persona presente en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa persona en los procedimientos de extradición.
11. El Estado parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del Estado parte que pide la extradición, a someter el caso sin demora injustificada a sus autoridades competentes a

efectos de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su decisión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado parte. Los Estados partes interesados cooperarán entre sí, en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas actuaciones.

12. Cuando el derecho interno de un Estado parte solo le permita extraditar o entregar de algún otro modo a uno de sus nacionales a condición de que esa persona sea devuelta a ese Estado parte para cumplir la condena impuesta como resultado del juicio o proceso por el que se solicitó la extradición o la entrega y ese Estado parte y el Estado parte que solicita la extradición acepten esa opción, así como toda otra condición que estimen apropiada, tal extradición o entrega condicional será suficiente para que quede cumplida la obligación enunciada en el párrafo 11 del presente artículo.

13. Si la extradición solicitada con el propósito de que se cumpla una condena es denegada por el hecho de que la persona buscada es nacional del Estado parte requerido, este, si su derecho interno lo permite y de conformidad con los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud del Estado parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena con arreglo al derecho interno del Estado parte requirente.

14. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos los derechos y garantías previstos por el derecho interno del Estado parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.

15. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones o si hay motivos fundados para creer que dicha persona correría peligro de ser sometida a torturas.

16. Los Estados partes no podrán denegar una solicitud de extradición únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

17. Antes de denegar la extradición, el Estado parte requerido, cuando proceda, consultará al Estado parte requirente para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y de proporcionar información pertinente a su alegato.

18. El Estado parte requerido informará al Estado parte requirente de su decisión respecto de la extradición.

19. Cada parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el nombre y la dirección de cada autoridad responsable del envío o de la recepción de las solicitudes de extradición o de detención provisional. El Secretario General de las Naciones Unidas creará y mantendrá actualizado un registro de las autoridades designadas por las partes. Cada parte garantizará la exactitud de los datos que figuren en el registro.

20. Los Estados partes procurarán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la extradición o aumentar su eficacia.

GRUPO TEMÁTICO 3

Artículo 59. Traslado de personas condenadas a cumplir una pena

Los Estados partes podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el traslado a su territorio de toda persona que haya sido condenada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad por algún

delito tipificado con arreglo a la presente Convención a fin de que complete allí su condena.

Artículo 60. Remisión de actuaciones penales

Los Estados partes considerarán la posibilidad de remitirse actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito comprendido en la presente Convención cuando se estime que esa remisión obrará en beneficio de la debida administración de justicia, en particular en casos en que intervengan varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones del proceso.

GRUPO TEMÁTICO 4

Artículo 61. Principios generales y procedimientos relativos a la asistencia judicial recíproca

1. Los Estados partes se prestarán la más amplia asistencia judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y otras actuaciones relacionados con los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y para la obtención de pruebas en forma electrónica de [delitos tipificados con arreglo a la presente Convención] [cualquier delito] [delitos graves].

2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida posible conforme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos pertinentes del Estado parte requerido con respecto a investigaciones, procesos y actuaciones de otro tipo relacionados con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser considerada responsable de conformidad con el artículo 35 de la presente Convención en el Estado parte requirente.

3. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las obligaciones dimanantes de otros tratados, bilaterales o multilaterales, vigentes o futuros, que rijan, total o parcialmente, la asistencia judicial recíproca.

4. La asistencia judicial recíproca que se preste de conformidad con el presente artículo podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes [con respecto al ámbito de aplicación del presente artículo establecido en el párrafo 1]:

a) recibir testimonios o tomar declaración a personas, incluidos los representantes de personas jurídicas;

b) notificar documentos judiciales;

c) efectuar inspecciones e incautaciones y embargar bienes con carácter preventivo;

d) buscar o acceder por una vía similar, decomisar u obtener por un medio similar y revelar [datos almacenados] [información almacenada] por medio de un sistema informático ubicado en el territorio del Estado parte requerido, [incluidos datos conservados] [incluida información conservada] con arreglo al artículo 68;

e) obtener en tiempo real [datos relativos al tráfico asociados] [información relativa al tráfico asociada] a comunicaciones específicas transmitidas en el territorio del Estado parte requerido, de conformidad con las condiciones y procedimientos previstos en el derecho interno de ese Estado parte, en relación con delitos respecto de los cuales sería posible obtener [datos relativos] [información relativa] al tráfico en tiempo real en un caso interno similar del Estado parte requerido;

f) reunir o registrar [datos relativos] [información relativa] al contenido de comunicaciones específicas transmitidas por medio de un sistema informático, en la medida en que lo permitan los tratados y las leyes nacionales aplicables de los Estados partes;

g) examinar objetos, [datos informáticos] [información electrónica/digital] y sitios;

h) proporcionar información, elementos de prueba y evaluaciones de peritos;

i) entregar originales o copias certificadas de los documentos y expedientes pertinentes, incluida la documentación pública, bancaria y financiera, así como la documentación social o registros contables de sociedades mercantiles;

j) identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los instrumentos u otros elementos con fines probatorios;

k) facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado parte requirente;

l) recuperar activos;

m) cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho interno del Estado parte requerido.

5. Los párrafos 6 a 28 se aplicarán a las solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo siempre que no medie entre los Estados partes interesados un tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados partes estén vinculados por un tratado de esa índole se aplicarán las disposiciones correspondientes de dicho tratado, salvo que los Estados partes convengan en aplicar, en su lugar, los párrafos 6 a 28 del presente artículo. Se insta encarecidamente a los Estados partes a que apliquen lo dispuesto en esos párrafos si facilitan la cooperación.

6. Los Estados partes podrán negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo y a los artículos 62 a 74 invocando la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de estimarlo necesario, el Estado parte requerido podrá prestar asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción propia, independientemente de que la conducta esté o no tipificada como delito en el derecho interno del Estado parte requerido. Esa asistencia se podrá negar cuando la solicitud entrañe asuntos *de minimis* o cuestiones respecto de las cuales la cooperación o asistencia solicitada esté prevista en virtud de otras disposiciones de la presente Convención.

7. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado parte y cuya presencia se solicite en otro Estado parte para fines de identificación, para prestar testimonio o para que ayude de alguna otra forma a obtener pruebas necesarias para investigaciones, procesos o actuaciones de otro tipo respecto de delitos establecidos en virtud de la presente Convención podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) la persona, debidamente informada, da su libre consentimiento;

b) las autoridades competentes de ambos Estados partes están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que estos consideren apropiadas.

8. A los efectos del párrafo 7 del presente artículo:

a) el Estado parte al que se traslade a la persona tendrá la competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo que el Estado parte del que ha sido trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) el Estado parte al que se traslade a la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado parte del que ha sido trasladada, según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados partes;

c) el Estado parte al que se traslade a la persona no podrá exigir al Estado parte del que ha sido trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) el tiempo que la persona haya permanecido detenida en el Estado parte al que ha sido trasladada se computará como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del que ha sido trasladada.

9. A menos que el Estado parte desde el cual se ha de trasladar a una persona de conformidad con los párrafos 7 y 8 del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada, detenida, condenada

ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos, omisiones o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado del que ha sido trasladada.

10. a) Cada Estado parte designará a una autoridad central encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial recíproca y facultada para darles cumplimiento o para transmitir las a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando alguna región o algún territorio especial de un Estado parte disponga de un régimen distinto de asistencia judicial recíproca, el Estado parte podrá designar a otra autoridad central que desempeñará la misma función para dicha región o dicho territorio;

b) Las autoridades centrales velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la solicitud por parte de dicha autoridad;

c) Cada Estado parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya sido designada a tal fin;

d) El Secretario General de las Naciones Unidas creará y mantendrá actualizado un registro de las autoridades centrales designadas por las partes. Cada parte garantizará la exactitud en todo momento de los datos que figuren en el registro;

e) Las solicitudes de asistencia judicial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados partes. La presente disposición no afectará al derecho de cualquiera de los Estados partes a exigir que estas solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplomática.

11. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto escrito, en un idioma aceptable para el Estado parte requerido, en condiciones que permitan a dicho Estado parte determinar la autenticidad. Cada Estado parte notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella, el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados partes convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente, debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.

12. Cuando no lo prohíban sus respectivas leyes, se alienta a los Estados partes a que den instrucciones a sus autoridades centrales para que transmitan y reciban las solicitudes de asistencia judicial recíproca y las comunicaciones conexas en formato electrónico. Cuando sea aceptable para las autoridades centrales de los dos Estados partes en cuestión, se alienta también a las autoridades centrales a transmitir y recibir pruebas electrónicas.

13. Si existe un acuerdo previo entre las autoridades centrales de dos Estados partes, no se exigirá autenticación ni certificación de la documentación u otro material que intercambien de conformidad con la presente Convención.

14. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá lo siguiente:

- a) la identidad de la autoridad que hace la solicitud;
- b) el objeto y la índole de las investigaciones, los procesos o las actuaciones de otro tipo a que se refiere la solicitud y el nombre y las funciones de la autoridad encargada de efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
- c) un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se trate de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
- d) una descripción de la asistencia solicitada y pormenores sobre cualquier procedimiento particular que el Estado parte requirente desee que se aplique;

e) de ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de toda persona, artículo o cuenta interesado; y

f) la finalidad para la que se solicita la prueba, información o asistencia de otro tipo.

15. El Estado parte requerido podrá pedir información complementaria cuando sea necesaria para dar cumplimiento a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para facilitar dicho cumplimiento.

16. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al derecho interno del Estado parte requerido y en la medida en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad con los procedimientos especificados en la solicitud.

17. El Estado parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin previo consentimiento del Estado parte requerido, la información o las pruebas proporcionadas por el Estado parte requerido para investigaciones, procesos o actuaciones de otro tipo distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado parte requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas que sean exculpatorias de una persona acusada. En este último caso, el Estado parte requirente notificará al Estado parte requerido antes de revelar la información o las pruebas y, si así se le solicita, consultará al Estado parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado parte requirente informará sin demora al Estado parte requerido de dicha revelación.

18. El Estado parte requirente podrá exigir que el Estado parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para darle cumplimiento. Si el Estado parte requerido no puede mantener esa reserva, lo hará saber sin demora al Estado parte requirente.

19. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:

a) cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo;

b) cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales;

c) cuando el derecho interno del Estado parte requerido prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con respecto a un delito análogo, si este hubiera sido objeto de investigaciones, procesos o actuaciones de otro tipo en el ejercicio de su propia competencia;

d) cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamiento jurídico del Estado parte requerido en lo relativo a la asistencia judicial recíproca.

20. Los Estados partes no podrán denegar una solicitud de asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere que el delito también entraña asuntos fiscales.

21. Los Estados partes no invocarán el secreto bancario para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente artículo.

22. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá fundamentarse debidamente.

23. El Estado parte requerido cumplirá la solicitud de asistencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que sugiera el Estado parte requirente y que estén debidamente fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado parte requerido responderá a las solicitudes razonables que formule el Estado parte requirente respecto de la evolución del trámite de la solicitud. El Estado parte requirente informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia solicitada.

24. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por el Estado parte requerido si perturbase investigaciones, procesos o actuaciones de otro tipo en curso.

25. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo al párrafo 19 del presente artículo o de diferir su cumplimiento con arreglo al párrafo 24 del presente artículo, el Estado parte requerido consultará al Estado parte requirente para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si el Estado parte requirente acepta la asistencia con arreglo a esas condiciones, ese Estado parte deberá observar las condiciones impuestas.

26. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 9 del presente artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias del Estado parte requirente, consienta en prestar testimonio en un juicio o en colaborar en una investigación o proceso en el territorio del Estado parte requirente no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabilidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del Estado parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince días consecutivos o durante el período acordado por los Estados partes después de la fecha en que se le haya informado oficialmente de que las autoridades competentes ya no requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o regrese libremente a él después de haberlo abandonado.

27. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado parte requerido, a menos que los Estados partes interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados partes se consultarán mutuamente para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como si, dadas las circunstancias, puede darse cumplimiento a ella y, de ser así, la manera en que se sufragarán los gastos.

28. El Estado parte requerido:

a) facilitará al Estado parte requirente una copia de los documentos oficiales y otros documentos o datos que obren en su poder y a los que, conforme a su derecho interno, tenga acceso el público en general;

b) podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que juzgue apropiadas, proporcionar al Estado parte requirente una copia total o parcial de los documentos oficiales o de otros documentos o datos que obren en su poder y que, conforme a su derecho interno, no estén al alcance del público en general.

29. Cuando sea necesario, los Estados partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las refuercen.

Artículo 62. Realización de interrogatorios y otras actuaciones mediante sistemas de videoconferencia o de conferencia telefónica

1. Las autoridades competentes de los Estados partes podrán celebrar un acuerdo para prestarse asistencia judicial recíproca mediante el uso de sistemas de videoconferencia o conferencia telefónica, según lo permita la legislación del Estado parte requerido, cuando una persona se encuentre en el territorio de un Estado parte y tenga que prestar declaración como testigo o perito ante autoridades judiciales de otro Estado parte. El Estado parte requerido podrá permitir que la audiencia se celebre por videoconferencia si no es posible o conveniente que la persona en cuestión comparezca personalmente en el territorio del Estado parte requirente.

2. Los Estados partes podrán convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad judicial del Estado parte requirente y en que asista a ella una autoridad judicial del Estado parte requerido.

3. Si el Estado parte requerido no tiene acceso a los medios técnicos para celebrar una videoconferencia, el Estado parte requirente podrá proporcionar dichos medios, de mutuo acuerdo.

Artículo 63. Base de datos electrónica sobre solicitudes de asistencia judicial recíproca

Cada Estado parte considerará la posibilidad de mantener bases de datos electrónicas que faciliten el acceso a estadísticas relativas a las solicitudes entrantes y salientes de asistencia judicial recíproca que entrañen pruebas electrónicas, a fin de garantizar que se realicen exámenes de la eficiencia y la eficacia.

Artículo 64. Transmisión espontánea de información

1. Dentro de los límites de su derecho interno y sin que exista ninguna solicitud previa, todo Estado parte podrá comunicar a otro Estado parte información obtenida en el marco de sus propias investigaciones si considera que ello puede ayudar al Estado parte receptor a iniciar o a llevar a cabo investigaciones o procedimientos en relación con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o cuando dicha información pueda dar lugar a una petición de cooperación de esa parte en virtud del presente capítulo.
2. Antes de comunicar esa información, el Estado parte que la comunique podrá solicitar que se preserve su confidencialidad o que el Estado receptor solo la utilice con sujeción a determinadas condiciones. Si el Estado parte receptor no puede atender esa solicitud, informará a la otra parte, quien determinará, entonces, si, no obstante, debe facilitar la información. Si el Estado parte receptor acepta la información en las condiciones establecidas, estará obligado a respetarlas. Sin embargo, una solicitud de confidencialidad no obstará para que el Estado parte receptor revele, en sus actuaciones penales, información que sea exculpatoria de una persona acusada. En tal caso, el Estado parte receptor notificará al Estado parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así se le solicita, consultará al Estado parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el Estado parte receptor informará sin demora al Estado parte transmisor de dicha revelación.
3. La transmisión de información con arreglo al presente artículo se hará sin perjuicio de las indagaciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado parte que facilita la información.

Artículo 65. Competencias de las misiones diplomáticas y oficinas consulares

1. Los Estados partes tendrán derecho a notificar documentos a sus propios ciudadanos a través de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares.
2. Los Estados partes tendrán derecho, siguiendo las instrucciones de sus autoridades competentes, a interrogar a sus propios ciudadanos a través de sus misiones diplomáticas u oficinas consulares, mediante la utilización de sistemas de videoconferencia o de conferencia telefónica, entre otros medios.
3. En las situaciones contempladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo, no podrá utilizarse ningún medio de coacción ni amenaza de coacción.

Artículo 66. Asistencia judicial recíproca de emergencia

1. A los efectos del presente artículo, se entenderá por emergencia una situación que implique un riesgo importante e inminente para la vida o la seguridad de cualquier persona.
2. Todo Estado parte podrá solicitar la prestación de asistencia recíproca a otro Estado parte en el menor tiempo posible si considera que hay una emergencia. Una solicitud formulada con arreglo al presente artículo incluirá, entre otros, una descripción de los hechos que indican que existe una emergencia y la pertinencia en relación con la asistencia solicitada.
3. El Estado parte requerido aceptará dicha solicitud en formato electrónico. No obstante, podrá solicitar que se garantice un nivel adecuado de seguridad y autenticación antes de aceptar la solicitud.

4. El Estado parte requerido podrá solicitar, en el menor tiempo posible, información adicional para evaluar la solicitud. El Estado parte requirente proporcionará dicha información adicional lo antes posible.
5. Una vez que se haya comprobado que existe una emergencia y que se han cumplido los demás requisitos para la prestación de asistencia recíproca, el Estado parte requerido responderá a la solicitud lo antes posible.
6. Cada Estado parte velará por que un funcionario de su autoridad central u otra autoridad que se encargue de responder a las solicitudes de asistencia recíproca de conformidad con el artículo [61] [relativo a la asistencia judicial recíproca] de la presente Convención esté disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a fin de responder a una solicitud formulada de conformidad con el presente artículo.
7. La autoridad central u otras autoridades responsables de la asistencia recíproca del Estado parte requirente y del Estado parte requerido podrán acordar que los resultados del cumplimiento de una solicitud formulada con arreglo al presente artículo, o una copia anticipada de esa solicitud, se faciliten al Estado parte requirente mediante un canal de comunicación diferente al utilizado normalmente para solicitar asistencia judicial recíproca.
8. En caso de emergencia, las autoridades competentes del Estado parte requirente podrán presentar solicitudes directamente a las autoridades competentes del Estado parte requerido o a través de la red 24/7 establecida en virtud del artículo 67 de la presente Convención o de los canales de la Organización Internacional de Policía Criminal. En cualquiera de esos casos, se enviará simultáneamente una copia de la solicitud a la autoridad central del Estado parte requerido a través de la autoridad central del Estado parte requirente. Si la solicitud se envía directamente a la autoridad central del Estado parte requerido y esta no es la autoridad competente para dar cumplimiento a la solicitud, la autoridad central derivará la solicitud a la autoridad competente e informará de ello a la autoridad central del Estado parte requirente.
9. Cada Estado parte, en el momento de la firma de la presente Convención o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, podrá informar al Secretario General de las Naciones Unidas de que, por razones de eficacia, las solicitudes formuladas con arreglo al presente párrafo deberán dirigirse únicamente a la autoridad central.

Artículo 67. Red 24/7

1. Cada Estado parte designará un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, a fin de garantizar la prestación de asistencia inmediata a efectos de investigaciones, enjuiciamientos u otras actuaciones relacionadas con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención o de reunir, obtener, conservar y transmitir pruebas en formato electrónico de [delitos tipificados con arreglo a la presente Convención] [cualquier delito] [delitos graves]. Dicha asistencia se prestará sin demora injustificada y de forma segura.
2. Se notificará al Secretario General de las Naciones Unidas dicho punto de contacto y este llevará un registro actualizado de los puntos de contacto designados a los efectos del presente artículo.
3. Esa asistencia comprenderá todo acto que facilite las medidas que figuran a continuación, o su aplicación directa si lo permiten el derecho y la práctica internos del Estado parte:
 - a) la prestación de asesoramiento técnico;
 - b) la conservación de [los datos informáticos almacenados] [la información electrónica/digital almacenada] con arreglo a los artículos 68 y 69;
 - c) la obtención de pruebas, el suministro de información de carácter jurídico y la localización de sospechosos.

4. a) El punto de contacto de un Estado parte dispondrá de los medios necesarios para comunicarse de forma rápida con el punto de contacto de otro Estado parte;
- b) Si el punto de contacto designado por un Estado parte no depende de la autoridad o autoridades de dicho Estado parte que se encarguen de la asistencia judicial recíproca o de la extradición, dicho punto de contacto se asegurará de poder actuar prontamente de forma coordinada con esa autoridad o autoridades.
5. Cada Estado parte garantizará la disponibilidad de personal capacitado y equipado para facilitar el funcionamiento de la red.
6. Los Estados partes utilizarán plenamente y reforzarán las redes autorizadas de puntos de contacto existentes, cuando proceda, y dentro de los límites de su derecho interno, incluidos los puntos de contacto 24/7 para delitos relacionados con computadoras de la Organización Internacional de Policía Criminal.

GRUPO TEMÁTICO 5

Artículo 68. Asistencia judicial en materia de conservación rápida de [datos informáticos almacenados] [información electrónica/digital almacenada]

1. Un Estado parte podrá solicitar a otro Estado parte que ordene o imponga de algún otro modo la conservación rápida de [datos almacenados] [información almacenada] por medio de un [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones] que se encuentre en el territorio de ese otro Estado parte y en relación con [los cuales] [la cual] la parte requirente tenga intención de presentar una solicitud de asistencia recíproca con vistas a la búsqueda o el acceso por una vía similar, el decomiso o la obtención por un medio similar o la revelación de [dichos datos] [dicha información].
2. Toda solicitud de conservación formulada en virtud del párrafo 1 deberá especificar:
 - a) la autoridad que solicita la conservación;
 - b) el delito objeto de la investigación o procedimiento penal y una breve exposición de los hechos relacionados con este;
 - c) [los datos informáticos almacenados] [la información electrónica/digital almacenada] que debe[n] conservarse y su relación con el delito;
 - d) cualquier información disponible que identifique al custodio de [los datos informáticos almacenados] [la información electrónica/digital almacenada] o la ubicación del [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones];
 - e) la necesidad de la conservación;
 - f) que el Estado parte requirente tiene intención de presentar una solicitud de asistencia recíproca con vistas a la búsqueda o al acceso por un medio similar, al embargo o a la obtención por un medio similar o a la divulgación de [los datos informáticos almacenados] [la información electrónica/digital almacenada];
 - g) la necesidad de mantener la confidencialidad de la solicitud de conservación y de no notificar al usuario.
3. Tras recibir la solicitud de otro Estado parte, el Estado parte requerido deberá adoptar todas las medidas adecuadas para proceder sin demora a la conservación de [los datos solicitados] [la información solicitada], de conformidad con su derecho interno. A efectos de responder a una solicitud, no se exigirá la doble incriminación como condición para proceder a la conservación.
4. Cuando un Estado parte exige la doble incriminación como condición para atender una solicitud de asistencia judicial recíproca con vistas a la búsqueda o el acceso por una vía similar, el decomiso o la obtención por un medio similar o la revelación de [datos almacenados] [información almacenada], podrá, en relación con delitos

diferentes de los tipificados con arreglo a la presente Convención, reservarse el derecho a denegar la solicitud de conservación en virtud del presente artículo en caso de que tenga motivos para considerar que, en el momento de la revelación de los datos, no se podrá cumplir la condición de la doble incriminación.

5. Además, las solicitudes de conservación solo podrán ser denegadas en los siguientes casos:

a) cuando la solicitud se refiera a un delito que el Estado parte requerido considere de carácter político o vinculado a un delito de carácter político; o

b) cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales.

6. Cuando el Estado parte requerido considere que la conservación de [los datos] [la información] no bastará para garantizar su disponibilidad futura o que pondrá en peligro la confidencialidad de la investigación del Estado parte requirente o la perjudicará de algún otro modo, informará de ello rápidamente al Estado parte requirente, al que corresponderá decidir si ha de darse cumplimiento a la solicitud pese a tales circunstancias.

7. Las medidas de conservación adoptadas en respuesta a solicitudes como la prevista en el párrafo 1 serán válidas por un período mínimo de 60 días, con el fin de que el Estado parte requirente pueda presentar una solicitud con vistas al registro o el acceso por un medio similar, la incautación o la obtención por un medio similar, o la divulgación de [los datos] [la información]. Una vez recibida la solicitud, [los datos] [la información] se conservarán hasta que se tome una decisión sobre dicha solicitud.

Artículo 69. Asistencia judicial recíproca en materia de revelación rápida de [datos relativos al tráfico conservados] [información relativa al tráfico conservada]

1. Si, al ejecutar una solicitud formulada de conformidad con el artículo 68 para la conservación de [datos relativos] [información relativa] al tráfico de una determinada comunicación, el Estado parte requerido descubriera que un proveedor de servicios de otro Estado parte ha participado en la transmisión de esa comunicación, el Estado parte requerido facilitará sin demora al Estado parte requirente un volumen suficiente de [datos relativos] [información relativa] al tráfico para que pueda identificarse al proveedor de servicios, así como la vía por la que se ha transmitido la comunicación.

2. La divulgación de [datos relativos] [información relativa] al tráfico en aplicación del párrafo 1 solo podrá ser denegada en los siguientes casos:

a) cuando la solicitud se refiera a un delito que el Estado parte requerido considere de carácter político o vinculado a un delito de carácter político; o

b) cuando el Estado parte requerido considere que el cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su soberanía, su seguridad, su orden público u otros intereses fundamentales.

Artículo 70. Asistencia judicial recíproca en materia de acceso a [datos informáticos almacenados] [información electrónica/digital almacenada]

1. Un Estado parte podrá solicitar a otro Estado parte la búsqueda o el acceso de un modo similar, la incautación o la obtención de un modo similar o la divulgación de [datos almacenados] [información almacenada] por medio de un [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones] que se encuentre en el territorio del Estado parte requerido, [incluidos los datos conservados] [incluida la información conservada] de conformidad con el artículo 68.

2. El Estado parte requerido responderá a la solicitud aplicando los instrumentos internacionales pertinentes, los acuerdos y las leyes mencionados en el artículo [56] [relativo a los principios generales de la cooperación internacional], así como de conformidad con otras disposiciones pertinentes del presente capítulo.

3. La solicitud deberá responderse a la mayor brevedad posible en los siguientes casos:

a) cuando existan motivos para creer que [los datos pertinentes están particularmente expuestos] [la información pertinente está particularmente expuesta] al riesgo de pérdida o de modificación; o

b) cuando los instrumentos, acuerdos o leyes mencionados en el párrafo 2 prevean una cooperación rápida.

Artículo 71. Asistencia judicial recíproca de emergencia en materia de presentación rápida de [datos informáticos almacenados] [información electrónica/digital almacenada]

1. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para que, en caso de emergencia, su punto de contacto en la red 24/7 a la que se hace referencia en el artículo [67] [relativo a la red 24/7] de la presente Convención pueda transmitir una solicitud a un punto de contacto de otro Estado parte y recibir una solicitud de este en la que se solicite asistencia inmediata para lograr que un proveedor de servicios situado en el territorio de ese Estado parte presente sin demora [determinados datos informáticos almacenados] [determinada información electrónica/digital almacenada] que obre[n] en poder o bajo el control de dicho proveedor de servicios.

2. Los Estados partes podrán reservarse el derecho de no revelar [los datos informáticos almacenados] [la información electrónica/digital almacenada] al Estado parte solicitante hasta que este transmita una solicitud de asistencia judicial recíproca de emergencia de conformidad con el artículo [66] [relativo a la asistencia judicial recíproca de emergencia].

3. Los Estados partes podrán, en el momento de la firma de la presente Convención o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que no darán curso a las solicitudes realizadas con arreglo a lo previsto en el párrafo 1 que tengan por objeto únicamente la divulgación de información sobre los abonados.

4. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con el párrafo 1, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir:

a) que sus autoridades soliciten [datos informáticos] [información electrónica/digital] a un proveedor de servicios ubicado en su territorio en respuesta a una solicitud formulada con arreglo al párrafo 1;

b) que un proveedor de servicios radicado en su territorio facilite [los datos informáticos solicitados] [la información electrónica/digital solicitada] a sus autoridades en respuesta a una solicitud formulada con arreglo al apartado a); y

c) que sus autoridades proporcionen [los datos informáticos solicitados] [la información electrónica/digital solicitada] al Estado parte requirente.

5. La solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 deberá especificar:

a) la autoridad competente que solicita [los datos informáticos] [la información electrónica/digital] y la fecha en que se emitió la solicitud;

b) una declaración de que la solicitud se ha emitido en virtud de la presente Convención;

c) el nombre y la dirección del proveedor o proveedores de servicios que poseen o controlan [los datos informáticos solicitados] [la información electrónica/digital solicitada];

d) el delito o delitos que son objeto de la investigación o de las actuaciones penales y una referencia a las disposiciones legales y a las penas aplicables;

e) hechos suficientes que demuestren la existencia de una emergencia e indiquen el modo en que [los datos solicitados] [la información solicitada] se relaciona[n] con ella;

f) una descripción detallada de [los datos informáticos requeridos] [la información electrónica/digital requerida];

g) cualquier instrucción procesal especial;

h) cualquier otra información que pueda contribuir a que se faciliten [los datos informáticos solicitados] [la información electrónica/digital solicitada].

6. El Estado parte requerido aceptará toda solicitud presentada de conformidad con el presente artículo en forma electrónica. Los Estados partes también podrán aceptar las solicitudes realizadas oralmente y exigir su confirmación en forma electrónica. Podrán solicitar que un nivel adecuado de seguridad y autenticación antes de aceptar la solicitud.

7. Los Estados partes podrán, en el momento de la firma de la presente Convención o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, declarar que exigen al Estado parte requirente, tras la ejecución de la solicitud, que presente la solicitud y cualquier otra información complementaria transmitida para respaldarla, en el formato y por el conducto que especifique el Estado parte requerido, que podrá incluir la asistencia judicial recíproca.

8. El Estado parte requerido informará sin demora al Estado parte requirente sobre su decisión en relación con la solicitud formulada de conformidad con el párrafo 1 y, si procede, especificará las condiciones en las que facilitará [los datos] [la información] y cualquier otra forma de cooperación que pueda ofrecer.

9. Si un Estado parte requirente no puede cumplir alguna de las condiciones impuestas por la parte requerida en virtud del párrafo 8, informará sin demora al Estado parte requerido. El Estado parte requerido determinará entonces si, no obstante, debe facilitar [los datos] [la información] o el material. Si el Estado parte requirente acepta las condiciones impuestas, estará obligado a respetarlas.

10. El Estado parte requerido que proporcione [datos] [información] o material supeditado a esa condición podrá exigir al Estado parte requirente precisiones sobre el uso que haya hecho de [dichos datos] [dicha información] o material en relación con esa condición.

Artículo 72. Acceso transfronterizo a [datos informáticos almacenados] [información electrónica/digital almacenada] con consentimiento o cuando sean de dominio público

[Con sujeción a reservas,] un Estado parte podrá, sin la autorización de otro Estado parte:

a) tener acceso a [datos informáticos almacenados] [información electrónica/digital almacenada] (de código abierto) de dominio público, con independencia de la ubicación geográfica de [los datos] [la información]; o

b) acceder, a través de un [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones] ubicado en su territorio, a [datos informáticos almacenados] [información electrónica/digital almacenada] que se encuentre[n] en otro Estado parte o [recibirlos] [recibirla], si el Estado parte que accede a [los datos] [la información] o [los] [la] recibe obtiene el consentimiento lícito y voluntario de la persona que tiene la autoridad legítima para revelar [los datos] [la información] a ese Estado parte a través de ese sistema informático.

Artículo 73. Asistencia judicial recíproca para la obtención en tiempo real de [datos relativos] [información relativa] al tráfico

1. Los Estados partes se prestarán asistencia judicial recíproca en lo que respecta a la obtención en tiempo real de [datos relativos al tráfico asociados] [información relativa al tráfico asociada] a determinadas comunicaciones transmitidas en su territorio

por medio de un [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones]. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2, dicha asistencia recíproca estará sujeta a las condiciones y procedimientos previstos en el derecho interno.

2. Cada Estado parte prestará esa asistencia al menos en relación con los delitos para los que sería posible la obtención en tiempo real de [datos relativos] [información relativa] al tráfico en situaciones análogas a nivel interno.

3. Una solicitud formulada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo deberá especificar:

- a) el nombre de la autoridad requirente;
- b) un resumen de los hechos principales, la naturaleza de la investigación, el proceso o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud;
- c) los [datos informáticos] [la información electrónica/digital] sobre [los datos relativos] [la información relativa] al tráfico que deberán recopilarse y su conexión con un delito u otro acto ilícito;
- d) cualquier [dato] [información] que identifique al propietario o usuario de [los datos] [la información] o la ubicación del [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones];
- e) una justificación de la necesidad de conservar [los datos relativos] [la información relativa] al tráfico;
- f) el período de recogida de [los datos relativos] [la información relativa] al tráfico y su correspondiente justificación.

Artículo 74. Asistencia judicial recíproca en la interceptación de [datos relativos al contenido] [información en formato electrónico/digital]

Los Estados partes se prestarán asistencia judicial recíproca para la obtención o el registro en tiempo real de [datos relativos al contenido] [información en formato electrónico/digital] de comunicaciones específicas transmitidas por medio de un [sistema informático] [sistema/dispositivo de tecnología de la información y las comunicaciones], en la medida en que lo permitan los tratados que les sean aplicables, así como su derecho interno.

GRUPO TEMÁTICO 6

Artículo 75. Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

1. Los Estados partes colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, cada Estado parte adoptará medidas eficaces para:

- a) mejorar los canales de comunicación entre sus autoridades, organismos y servicios competentes y, de ser necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio seguro y rápido de información sobre todos los aspectos de los delitos comprendidos en la presente Convención, así como, si los Estados partes interesados lo estiman oportuno, sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
- b) cooperar con otros Estados partes en la realización de indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la presente Convención acerca de:
 - i) la identidad, el paradero y las actividades de personas presuntamente implicadas en tales delitos o la ubicación de otras personas interesadas;
 - ii) el movimiento del producto del delito o de bienes derivados de la comisión de esos delitos;

iii) el movimiento y la ubicación de bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o destinados a utilizarse en la comisión de esos delitos;

c) proporcionar, cuando proceda, los elementos o [los datos] [la información] que se requieran para fines de análisis o investigación;

d) intercambiar información con otros Estados partes sobre los medios y métodos específicos utilizados por quienes cometen los delitos comprendidos en la presente Convención, incluido, cuando proceda, el uso de identidades falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios de encubrir sus actividades y el uso de plataformas cifradas ilícitas y tácticas, técnicas y procedimientos [de ciberdelincuencia] [asociados a la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], así como indicadores operativos de peligro y otros indicadores preocupantes;

e) intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas con miras a la pronta detección de los delitos comprendidos en la presente Convención.

2. Los Estados partes, con miras a dar efecto a la presente Convención, considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia de cooperación directa entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales acuerdos o arreglos entre los Estados partes interesados, las partes podrán considerar la presente Convención como la base para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente Convención. Cuando proceda, los Estados partes recurrirán plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso con organizaciones internacionales o regionales, con miras a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

3. Los Estados partes se esforzarán por colaborar en la medida de sus posibilidades para hacer frente a los delitos comprendidos en la presente Convención mediante el recurso a la tecnología moderna.

Artículo 76. Asociaciones entre los sectores público y privado para mejorar la investigación de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos]

1. Los Estados partes colaborarán con miras a celebrar acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para prestar asistencia a sus respectivos organismos encargados de hacer cumplir la ley en cooperación directa con los proveedores de servicios pertinentes en sus respectivos territorios mediante asociaciones entre los sectores público y privado, con miras a simplificar la cooperación con la industria y reforzar la colaboración entre los Estados partes, los Gobiernos y los proveedores de servicios privados para establecer modalidades o protocolos de cooperación en materia de cumplimiento de la ley, la investigación de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y la obtención de pruebas, en particular para dar respuesta a los retos que plantea la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas.

2. Los Estados partes elaborarán directrices para que los proveedores de servicios presten asistencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la investigación de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], en particular respecto del formato y la duración de la conservación de las pruebas y la información digitales, así como de la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas.

Artículo 77. Investigaciones conjuntas

Los Estados partes considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o más Estados, las autoridades competentes puedan establecer órganos mixtos de investigación. A falta

de acuerdos o arreglos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por caso. Los Estados partes participantes velarán por que la soberanía del Estado parte en cuyo territorio haya de efectuarse la investigación sea plenamente respetada.

Artículo 78. Técnicas especiales de investigación

1. Con el fin de combatir con eficacia la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], cada Estado parte, según lo permitan los principios fundamentales de su derecho interno y con sujeción a las condiciones prescritas por su derecho interno, adoptará, en la medida de sus capacidades, las medidas que sean necesarias para permitir el uso adecuado por las autoridades competentes de las entregas vigiladas y de otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia electrónica o de otro tipo, así como para la realización de operaciones encubiertas por sus autoridades competentes en su territorio, y para garantizar que las pruebas obtenidas mediante esos métodos sean aceptables ante los tribunales.

2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente Convención, se alienta a los Estados partes a que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de jurisdicción por los Estados partes interesados.

4. Toda decisión de recurrir a técnicas especiales de investigación en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los Estados partes interesados, incluir la aplicación de métodos tales como obtener e interceptar [datos relativos] [información relativa] al tráfico y autorizar su transmisión de forma ininterrumpida o su retiro o sustitución total o parcial.

GRUPO TEMÁTICO 7

Artículo 79. Medidas para la recuperación de bienes

Los Estados partes se prestarán la más amplia cooperación y asistencia judicial recíproca en la recuperación de los bienes obtenidos por medios delictivos, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y su derecho interno, teniendo en cuenta las iniciativas pertinentes de las organizaciones internacionales regionales e interregionales en materia de lucha contra el blanqueo de dinero.

Artículo 80. Medidas para la recuperación directa de bienes

Cada Estado parte adoptará, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias:

a) facultar a otro Estado parte, a sus ciudadanos y a los apátridas que residan permanentemente en su territorio y a las personas jurídicas constituidas o que tengan domicilio social en su territorio, para entablar ante sus tribunales una acción civil con objeto de probar que se ha vulnerado un derecho de propiedad por la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención;

b) facultar a sus tribunales para ordenar a aquellos que hayan cometido delitos tipificados con arreglo a la presente Convención que indemnicen o resarzan por daños y perjuicios a otro Estado parte que haya resultado perjudicado por esos delitos; y

c) facultar a sus tribunales o autoridades competentes, cuando deban adoptar decisiones con respecto al decomiso, para reconocer, total o parcialmente, el legítimo derecho de propiedad de otros Estados partes, sus ciudadanos o los apátridas que residan permanentemente en su territorio, o las personas jurídicas constituidas o que tengan domicilio social en su territorio, sobre los bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 81. Mecanismos de recuperación de bienes mediante la cooperación internacional para fines de decomiso

1. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto en el artículo [82] [relativo a la cooperación internacional con fines de decomiso] de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un delito tipificado con arreglo a [los artículos relativos a la criminalización de] la presente Convención o relacionados con ese delito, de conformidad con su derecho interno:

a) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un tribunal de otro Estado parte;

b) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el decomiso de esos bienes de origen extranjero en una sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en su derecho interno; y

c) adoptará las medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de esos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos apropiados.

2. Cada Estado parte, a fin de prestar asistencia judicial recíproca solicitada con arreglo a lo dispuesto en [el artículo 82, párrafo 2,] de la presente Convención, de conformidad con su derecho interno:

a) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una orden de embargo preventivo o incautación dictada por un tribunal o autoridad competente de un Estado parte requirente que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del párrafo 1 a) del presente artículo;

b) adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan efectuar el embargo preventivo o la incautación de bienes en cumplimiento de una solicitud que constituya un fundamento razonable para que el Estado parte requerido considere que existen razones suficientes para adoptar esas medidas y que ulteriormente los bienes serían objeto de una orden de decomiso a efectos del párrafo 1 a) del presente artículo; y

c) considerará la posibilidad de adoptar otras medidas para que sus autoridades competentes puedan preservar los bienes a efectos de decomiso, por ejemplo sobre la base de una orden extranjera de detención o inculación penal relacionada con la adquisición de esos bienes.

Artículo 82. Cooperación internacional para fines de decomiso

1. Los Estados partes que reciban una solicitud de otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención con miras al decomiso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el artículo [50] [relativo al embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del delito], párrafo 1, de la presente Convención que se

encuentren en su territorio deberán, en la mayor medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno:

a) remitir la solicitud a sus autoridades competentes para obtener una orden de decomiso a la que, en caso de concederse, darán cumplimiento; o

b) presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de decomiso expedida por un tribunal situado en el territorio del Estado parte requirente de conformidad con lo dispuesto en el artículo [50], párrafo 1, de la presente Convención en la medida en que guarde relación con el producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos que se encuentren en el territorio del Estado parte requerido.

2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado parte que tenga jurisdicción para conocer de un delito tipificado en virtud de la presente Convención, el Estado parte requerido adoptará medidas encaminadas a la identificación, la localización y el embargo preventivo o la incautación del producto del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos mencionados en el artículo [50], párrafo 1, de la presente Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de ordenar el Estado parte requirente o, en caso de que medie una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, el Estado parte requerido.

3. Las disposiciones del artículo [61] [relativo a los principios y procedimientos generales relativos a la asistencia judicial recíproca] son aplicables, *mutatis mutandis*, al presente artículo. Además de la información indicada en el artículo [61], párrafo 14, las solicitudes presentadas de conformidad con el presente artículo contendrán lo siguiente:

a) cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 1 a) del presente artículo, una descripción de los bienes susceptibles de decomiso, así como, en la medida de lo posible, la ubicación y, cuando proceda, el valor estimado de los bienes y una exposición de los hechos en que se basa la solicitud del Estado parte requirente que sean lo suficientemente explícitas para que el Estado parte requerido pueda tramitar la orden con arreglo a su derecho interno;

b) cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 1 b) del presente artículo, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado parte requirente en la que se basa la solicitud, una exposición de los hechos y la información que proceda sobre el grado de ejecución que se solicita dar a la orden, una declaración en la que se indiquen las medidas adoptadas por el Estado parte requirente para dar notificación adecuada a terceros de buena fe y para garantizar el debido proceso y un certificado de que la orden de decomiso es definitiva;

c) cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del presente artículo, una exposición de los hechos en que se basa el Estado parte requirente y una descripción de las medidas solicitadas, así como, cuando se disponga de ella, una copia admisible en derecho de la orden de decomiso en la que se basa la solicitud.

4. El Estado parte requerido adoptará las decisiones o medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que pudiera estar vinculado al Estado parte requirente.

5. Cada Estado parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga de tales leyes y reglamentos o una descripción de esta.

6. Si un Estado parte opta por supeditar la adopción de las medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado parte considerará la presente Convención como la base de derecho necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.

7. Los Estados partes podrán denegar la cooperación solicitada con arreglo al presente artículo si el delito al que se refiere la solicitud no es un delito tipificado con arreglo a la presente Convención. La cooperación prevista en el presente artículo también se podrá denegar, o se podrán levantar las medidas cautelares, si el Estado parte requerido no recibe pruebas suficientes u oportunas o si los bienes son de escaso valor.

8. Antes de levantar toda medida cautelar adoptada de conformidad con el presente artículo, el Estado parte requerido deberá, siempre que sea posible, dar al Estado parte requirente la oportunidad de presentar sus razones a favor de mantener en vigor la medida.

9. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.

10. Los Estados partes considerarán la posibilidad de celebrar tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional prestada con arreglo al presente artículo.

Artículo 83. Cooperación especial

Sin perjuicio de lo dispuesto en su derecho interno, cada Estado parte procurará adoptar medidas para remitir a otro Estado parte, por propia iniciativa y siempre que tales medidas no perjudiquen las investigaciones o actuaciones judiciales que lleven a cabo sus propias autoridades competentes, información sobre los bienes derivados de la comisión de un delito comprendido en la presente Convención si considera que revelar esa información puede dar lugar a que las autoridades competentes del Estado parte receptor pongan en marcha investigaciones o actuaciones judiciales, o que la información así facilitada podría dar lugar a que ese Estado parte presentara una solicitud con arreglo al presente capítulo de la Convención.

Artículo 84. Devolución y disposición del producto del delito o de los bienes decomisados

[Opción 1:]

1. Todo Estado parte que haya decomisado bienes con arreglo a lo dispuesto en el artículo [50] [relativo al embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del delito], párrafo 1, o en el artículo [82] [relativo a la cooperación internacional con fines de decomiso] de la presente Convención dispondrá de esos bienes, entre otras cosas devolviéndolos a sus legítimos propietarios anteriores, de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo y con su derecho y sus procedimientos administrativos internos.

2. Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes procedan a la restitución de los bienes decomisados, al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte, de conformidad con la presente Convención, teniendo en cuenta los derechos de terceros de buena fe y conforme a su derecho interno.

3. De conformidad con el artículo [82] [relativo a la cooperación internacional para fines de decomiso] de la presente Convención y con los párrafos 1 y 2 del presente artículo, el Estado parte requerido:

a) en caso de malversación o peculado de bienes públicos, restituirá al Estado parte requirente los bienes decomisados cuando se haya procedido al decomiso con arreglo a lo dispuesto en el artículo [93] [relativo a la prevención y detección de las transferencias del producto del delito] de la presente Convención y sobre la base de una sentencia firme dictada en el Estado parte requirente, requisito al que podrá renunciar el Estado parte requerido;

b) en todos los demás casos, darán consideración prioritaria a la restitución de los bienes decomisados a sus legítimos propietarios anteriores o a la indemnización o el resarcimiento por daños y perjuicios de las víctimas del delito.

4. Cuando proceda, a menos que los Estados partes decidan otra cosa, el Estado parte requerido podrá deducir los gastos razonables que haya efectuado en el curso de las investigaciones o actuaciones judiciales que hayan posibilitado la restitución o disposición de los bienes decomisados conforme a lo dispuesto en el presente artículo.

5. Con el fin de concertar arreglos mutuamente aceptables sobre la disposición definitiva de los bienes decomisados, los Estados partes podrán mantener consultas y celebrar acuerdos por separado.]

[*Opción 2:*

1. Un Estado parte dispondrá del producto del delito o los bienes que haya decomisado con arreglo a lo dispuesto en el artículo [50] [relativo al embargo preventivo, la incautación y el decomiso del producto del delito], párrafo 1, o en el artículo [82] [relativo a la cooperación internacional con fines de decomiso] de la presente Convención de manera conforme con su derecho interno y sus procedimientos administrativos.

2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte con arreglo al artículo [50] de la presente Convención, los Estados partes, en la medida en que lo permita su derecho interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración prioritaria a la devolución del producto del delito o de los bienes decomisados al Estado parte requirente a fin de que este pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.

3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado parte con arreglo al artículo [50] o el artículo [82] de la presente Convención, los Estados partes podrán considerar en particular la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:

a) aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho producto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el artículo [89] [relativo a la aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica], párrafo 3 c), de la presente Convención y a organismos intergubernamentales especializados en la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos];

b) repartirse con otros Estados partes, sobre la base de un criterio general o definido para cada caso, ese producto del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su derecho interno o sus procedimientos administrativos.]

Artículo 85. Gastos

Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de una solicitud serán sufragados por el Estado parte requerido, a menos que los Estados partes interesados hayan acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados partes se consultarán entre sí para determinar las condiciones en que se dará cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los gastos.

Capítulo V

Asistencia técnica, incluido el intercambio de información

Artículo 86. Principios generales de la asistencia técnica

1. Los siguientes principios guiarán a los Estados partes en lo que respecta a la prestación de asistencia técnica y el fomento de la capacidad:

a) la asistencia técnica y la creación de capacidad se llevarán a cabo de forma inclusiva e incluirán a todas las naciones, prestando especial atención a los países en desarrollo, y a todas las partes interesadas pertinentes;

b) cada beneficiario debe determinar sus propias prioridades, sobre la base de las situaciones y necesidades específicas de cada país;

c) las iniciativas seguirán un enfoque global y sistemático que incluya múltiples niveles y dimensiones (aspectos técnicos, humanos, organizacionales, gubernamentales y jurídicos), se base en las capacidades existentes y garantice la sostenibilidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Artículo 87. Capacitación y asistencia técnica

1. En la medida de sus posibilidades, los Estados partes considerarán la posibilidad de prestarse la más amplia asistencia técnica y fomento de la capacidad, especialmente en favor de los países en desarrollo, en sus respectivos planes y programas para prevenir y combatir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], incluido apoyo material, capacitación y asistencia de otro tipo e intercambio mutuo de experiencia y conocimientos especializados pertinentes, lo que facilitará la cooperación internacional entre los Estados partes en la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

2. Los Estados partes, en la medida necesaria, pondrán en marcha, desarrollarán, implementarán o perfeccionarán programas de capacitación específicamente concebidos para su personal responsable de prevenir, detectar, investigar y enjuiciar los delitos comprendidos en la presente Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones e intercambios de personal. En particular y en la medida en que lo permita el derecho interno, guardarán relación con:

a) los métodos y técnicas empleados en la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos comprendidos en la presente Convención;

b) la creación de capacidad para formular y planificar políticas estratégicas y leyes destinadas a prevenir y combatir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos];

c) las técnicas utilizadas por personas presuntamente implicadas en delitos comprendidos en la presente Convención y las contramedidas pertinentes;

d) la creación de capacidad en la obtención de pruebas, en particular pruebas electrónicas, incluido el mantenimiento de la cadena de custodia y el análisis forense;

e) la creación de capacidad en materia de conservación y transmisión de pruebas electrónicas, incluido el uso de métodos de reunión de pruebas y de investigación;

f) la formación de las autoridades competentes en la preparación de solicitudes de asistencia judicial recíproca y otros medios de cooperación que cumplan los requisitos establecidos en la presente Convención, especialmente para la obtención, conservación e intercambio de pruebas electrónicas, que podrá contar con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

g) el equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer cumplir la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega vigilada y las operaciones encubiertas, y su empleo;

h) el rastreo de las comunicaciones y de los activos virtuales para fines de investigación penal;

i) la prevención, detección y vigilancia de los movimientos del producto de la comisión de los delitos contemplados en la presente Convención, bienes, equipo u otros instrumentos;

j) los métodos empleados para la transferencia, ocultación o disimulación del producto de la comisión de delitos comprendidos en la presente Convención, bienes, equipo u otros instrumentos, así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros;

k) mecanismos y métodos legales y administrativos apropiados y eficientes para facilitar el embargo y decomiso del producto de delitos comprendidos en la presente Convención;

l) métodos utilizados para proteger a las víctimas y los testigos que cooperen con las autoridades judiciales;

m) la protección efectiva de los derechos humanos, incluida la protección de la intimidad y los datos personales y el respeto de las garantías procesales en la prevención y la lucha contra los delitos comprendidos en la presente Convención;

n) métodos para integrar la perspectiva de género en la elaboración de políticas, la legislación y la programación;

o) formación en derecho sustantivo y procesal pertinente, y en facultades de investigación para la aplicación de la ley, así como en normativa nacional e internacional y en idiomas.

3. Los Estados partes se prestarán asistencia en la planificación y ejecución de programas de investigación y capacitación encaminados a intercambiar conocimientos especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacionales para promover la cooperación y fomentar el examen de los problemas de interés común.

4. Los Estados partes considerarán, previa solicitud, la posibilidad de ayudarse entre sí en la realización de evaluaciones, estudios e investigaciones sobre los tipos, causas y efectos de los delitos comprendidos en la presente Convención cometidos en sus respectivos territorios con miras a elaborar, con la participación de las autoridades competentes y las principales partes interesadas, incluida la sociedad civil y el sector privado, estrategias y planes de acción para prevenir y combatir esos delitos.

5. Los Estados partes promoverán actividades de capacitación y asistencia técnica que faciliten la extradición y la asistencia judicial recíproca. Dicha capacitación y asistencia técnica podrán incluir la enseñanza de idiomas, asistencia para la redacción y tramitación de solicitudes de asistencia judicial recíproca y adscripciones e intercambios de personal entre autoridades centrales u organismos con responsabilidades pertinentes.

6. Los Estados partes intensificarán, en la medida necesaria, los esfuerzos para optimizar la eficacia de las actividades operacionales y de capacitación en las organizaciones internacionales y regionales y en el marco de los acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.

7. Se alienta encarecidamente a los Estados partes a considerar la posibilidad de establecer mecanismos voluntarios con miras a contribuir financieramente a los esfuerzos de los países en desarrollo para aplicar la presente Convención mediante programas de asistencia técnica y proyectos de fomento de la capacidad.

8. Los Estados partes que dispongan de capacidades e infraestructuras más avanzadas en el ámbito de la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] deberán asumir responsabilidades acordes con esas capacidades al prestar asistencia a otros Estados, especialmente a países en desarrollo, y al proporcionarles apoyo y asesoramiento y transferirles conocimientos en la esfera de la lucha contra ese tipo de delitos.

9. Los Estados partes encomendarán a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito la tarea de coordinar y prestar asistencia técnica especializada a los Estados partes que la soliciten, en colaboración con otras organizaciones internacionales y regionales, según proceda, con miras a promover la ejecución de programas y proyectos para prevenir y combatir los delitos comprendidos en la presente Convención.

10. Se alienta encarecidamente a cada Estado parte a considerar la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con el propósito de impulsar, a través de dicha Oficina, programas y proyectos con miras a aplicar la presente Convención mediante la asistencia técnica y el fomento de la capacidad.

Artículo 88. Intercambio de información

1. Cada Estado parte considerará la posibilidad de analizar, en consulta con los expertos pertinentes, las tendencias en su territorio relativas a los delitos comprendidos en la presente Convención, así como las circunstancias en que se cometen esos delitos.
2. Los Estados partes considerarán la posibilidad de desarrollar y compartir, entre sí y por conducto de organizaciones internacionales y regionales, estadísticas, experiencia analítica e información acerca de la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], con miras a establecer, en la medida de lo posible, definiciones, normas y metodologías comunes, incluidas las mejores prácticas para prevenir y combatir esos delitos.
3. Los Estados partes vigilarán sus políticas y las medidas prácticas encaminadas a prevenir y combatir los delitos comprendidos en la presente Convención y evaluarán su eficacia y eficiencia.
4. Los Estados partes considerarán la posibilidad de intercambiar información sobre los avances jurídicos, normativos y tecnológicos relacionados con la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y la reunión de pruebas en formato electrónico.

Artículo 89. Aplicación de la Convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica

1. Los Estados partes adoptarán disposiciones conducentes a la aplicación óptima de la presente Convención en la medida de lo posible, mediante la cooperación internacional, teniendo en cuenta los efectos adversos de los delitos tipificados en virtud de la presente Convención en la sociedad en general y en el desarrollo sostenible en particular.
2. Al prestar y recibir asistencia técnica, los Estados partes tendrán plenamente en cuenta los principios de responsabilidad compartida, implicación, sostenibilidad, transparencia y rendición de cuentas, mediante, entre otras cosas, lo siguiente:
 - a) cooperar eficazmente con otros Estados partes y con diversas partes interesadas, independientemente de su nivel de desarrollo, según proceda;
 - b) determinar las prioridades en función de las situaciones y necesidades de cada país;
 - c) garantizar la sostenibilidad y el impacto duradero de las medidas de asistencia técnica aprovechando las capacidades existentes;
 - d) comunicar con transparencia las medidas de asistencia técnica, según proceda.
3. Los Estados partes harán esfuerzos concretos, en la medida de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con organizaciones internacionales y regionales y la sociedad civil, teniendo en cuenta en particular la función central de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en este ámbito, por:
 - a) intensificar su cooperación en los diversos niveles con otros Estados partes, en particular los países en desarrollo con miras a fortalecer su capacidad para prevenir y combatir los delitos tipificados en virtud de la presente Convención;

b) aumentar la asistencia financiera y material para apoyar los esfuerzos de otros Estados partes, en particular los países en desarrollo, para prevenir y combatir eficazmente los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y ayudarlos a aplicarla con éxito;

c) prestar asistencia técnica a otros Estados partes, en particular los países en desarrollo y a los países con economías en transición, para contribuir a satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación de la presente Convención. A tal fin, los Estados partes procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y periódicas a una cuenta específicamente designada a esos efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones Unidas. Con arreglo a su derecho interno y a las disposiciones de la Convención, los Estados partes podrán también dar consideración especial a la posibilidad de ingresar en esa cuenta un porcentaje del dinero decomisado o de la suma equivalente a los bienes o al producto del delito decomisados conforme a lo dispuesto en la Convención;

d) alentar y persuadir a otros Estados, a la sociedad civil, incluidos los círculos académicos, los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales, a las organizaciones internacionales, a las instituciones financieras y al sector privado, según proceda, para que se sumen o contribuyan de otro modo a los esfuerzos, también de conformidad con el presente artículo, en particular proporcionando más programas de formación y equipos modernos a los países en desarrollo a fin de ayudarlos a alcanzar los objetivos de la presente Convención;

e) intercambiar mejores prácticas e información sobre las actividades realizadas, con el fin de mejorar la transparencia, evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar al máximo las lecciones aprendidas.

4. Los Estados partes también considerarán la posibilidad de recurrir a programas subregionales, regionales e internacionales existentes, entre ellos la organización de conferencias y seminarios, para promover la cooperación y la asistencia técnica y para fomentar los debates sobre problemas de interés mutuo, incluidos los problemas y necesidades especiales de los países en desarrollo y los países con economías en transición.

5. Los Estados partes se esforzarán por aprovechar los conocimientos especializados de otros Estados partes, el mundo académico, la sociedad civil y el sector privado, y por cooperar estrechamente con ellos, con miras a mejorar la aplicación efectiva de la presente Convención.

6. En la medida de lo posible, los Estados partes garantizarán que los recursos y esfuerzos se distribuyan y canalicen de forma que contribuyan a la armonización de las normas, las habilidades, las capacidades, los conocimientos y las capacidades técnicas, con el fin de establecer unas normas mínimas comunes entre los Estados partes para erradicar los refugios seguros para los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y reforzar la lucha contra la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

7. En lo posible, las medidas adoptadas en cumplimiento del presente artículo no menoscabarán los compromisos existentes en materia de asistencia externa ni otros arreglos de cooperación financiera en los planos bilateral, regional o internacional.

8. Los Estados partes podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales, regionales o multilaterales sobre asistencia material y logística, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en la presente Convención y para prevenir, detectar, investigar, enjuiciar y controlar los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

9. Cada Estado parte comunicará, cuando proceda, al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados partes de conformidad con este artículo.

10. Los Estados partes y otras organizaciones encargadas de la aplicación se asegurarán de que los esfuerzos de asistencia emprendidos en apoyo de la creación de capacidad estén sujetos a procesos de seguimiento y evaluación adecuados y transparentes para valorar su eficacia.

Capítulo VI

Medidas preventivas

Artículo 90. Disposiciones generales sobre prevención

1. Cada Estado parte se esforzará por elaborar y evaluar proyectos nacionales y, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, establecerá y promoverá, incluso mediante la participación de las partes interesadas pertinentes, políticas eficaces y coordinadas y mejores prácticas encaminadas a prevenir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

2. Los Estados partes procurarán, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno y con el derecho internacional de los derechos humanos aplicable, reducir las oportunidades actuales o futuras de [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], adoptando las medidas legislativas, administrativas o de otra índole que proceda. Las medidas preventivas pueden centrarse en:

a) reforzar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras entidades pertinentes, de conformidad con la legislación nacional, especialmente las del sector privado, en particular las instituciones financieras, así como las del sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y el sector educativo, además del público en general, en relación con asuntos que impliquen la comisión de delitos contemplados en la presente Convención, velando al mismo tiempo por que la carga que recaiga sobre dichas entidades sea proporcionada y por que las entidades del sector privado respeten plenamente las leyes que protegen los derechos de sus usuarios;

b) desarrollar, facilitar y promover actividades de sensibilización pública, campañas de información pública, programas de educación pública y planes de estudio y políticas destinadas a la prevención de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], incluidos programas de alfabetización mediática e informacional dirigidos en particular a grupos vulnerables como los niños, los jóvenes y las personas mayores. Dicha información podrá difundirse, cuando proceda, a través de los medios de comunicación masiva y los programas y políticas pertinentes incluirán medidas para promover la participación pública en la prevención y la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos];

c) emitir periódicamente advertencias no vinculantes sobre prevención de incidentes y transmitirlos al público con vistas a prevenir incidentes cibernéticos que puedan dar lugar a actividades delictivas;

d) mejorar la seguridad de la información en el sector privado, entre otras cosas mediante la promoción y el desarrollo de normas y procedimientos de seguridad adecuados;

e) animar a las empresas de su jurisdicción a emplear enfoques basados en el riesgo para mejorar su resiliencia frente a los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y para detectar incidentes de este tipo, responder a ellos y recuperarse posteriormente;

f) establecer políticas de control de calidad de los productos que se apliquen en la protección de [sistemas informáticos] [sistemas/dispositivos de tecnología de la información y las comunicaciones] antes de que dichos productos se pongan a disposición del público;

g) desarrollar estrategias y políticas para prevenir y erradicar la violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres y las niñas perpetrada por medio de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones], y los delitos motivados por el odio, en particular cuando se perpetrán por medio de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones], y que sean adecuadas para grupos vulnerables como las personas mayores y las personas con discapacidad;

h) adoptar medidas específicas y adaptadas a las necesidades para mantener la seguridad en línea de los niños. A tal fin, entre otras cosas, se debería velar por que los marcos jurídicos nacionales, los arreglos prácticos y los arreglos de cooperación internacional permitan la denuncia, detección, investigación, enjuiciamiento y disuasión del abuso y la explotación sexuales de los niños en línea;

i) construir e invertir en el aumento de la capacidad de la justicia penal nacional, incluida la formación y el desarrollo de conocimientos especializados entre los profesionales de la justicia penal, como parte de las estrategias nacionales de prevención contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos];

j) intercambiar información entre sectores de la industria sobre tendencias y riesgos relacionados con la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], incluida la remisión a las autoridades nacionales competentes;

k) distribuir al sector privado alertas de incidentes y contramedidas sobre las tendencias relativas a la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

3. Los Estados partes se esforzarán por evaluar periódicamente los marcos jurídicos y las prácticas administrativas nacionales pertinentes existentes con el fin de detectar las lagunas y los puntos vulnerables y garantizar su pertinencia ante las cambiantes amenazas que representan los delitos enunciados en la presente Convención.

4. Los Estados partes se esforzarán por reunir experiencias nacionales y regionales en materia de prevención para crear un repositorio multilateral, administrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que permita la difusión de buenas prácticas en materia de prevención de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] en diversos contextos. La Oficina facilitará el intercambio de mejores prácticas en relación con medidas de prevención de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] eficaces y que hayan dado buenos resultados.

5. Los Estados partes colaborarán entre sí y con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes, según proceda, con miras a promover y formular las medidas mencionadas en el presente artículo. Esa colaboración incluirá la participación en proyectos internacionales dirigidos a prevenir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

*Artículo 91. Autoridad o autoridades responsables de prevenir y combatir
[la ciberdelincuencia] [delitos y otros actos ilícitos relacionados con la
utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones
con fines delictivos]*

1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de una o más autoridades, según proceda, encargadas de prevenir y combatir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

2. Cada Estado parte comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados partes a formular y aplicar medidas específicas para prevenir la

[ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

Artículo 92. Participación de la sociedad

1. Cada Estado parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, los medios de difusión, el sector privado, incluido el sector de la tecnología y las instituciones financieras, y las organizaciones comunitarias, en la prevención y la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de esta delincuencia, así como a la amenaza que representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

a) aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;

b) garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) emprender actividades de información pública, así como programas de educación pública, incluidos los planes de estudios escolares y universitarios, que contribuyan a la intransigencia con la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos];

d) respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos]. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

i) respetar los derechos o la reputación de terceros;

ii) salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral.

2. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de la autoridad o autoridades competentes pertinentes que sean responsables de la prevención y la lucha contra la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], a que se hace referencia en la presente Convención, y facilitará el acceso a esas autoridades, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualquier incidente que pueda considerarse constitutivo de un delito comprendido en la presente Convención.

Artículo 93. Prevención y detección de transferencias del producto del delito

1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas que sean necesarias, de conformidad con su derecho interno, para poder recabar, de las instituciones financieras y las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital sobre las que tengan jurisdicción, información sobre la identidad de los clientes y beneficiarios finales respecto de los cuales haya información sobre su posible participación o la de sus familiares o asociados cercanos o personas que actúen en su nombre en la comisión de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, incluida información sobre las cuentas de todas las personas mencionadas.

2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas necesarias para poder exigir, de conformidad con su derecho interno, que las instituciones financieras, así como las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, adopten medidas razonables para vigilar las cuentas que procuren o mantengan las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo o que se procuren o mantengan en su nombre.

3. Las medidas a que se refieren los párrafos 1 y 2 del presente artículo estarán razonablemente diseñadas para detectar transacciones sospechosas con el fin de informar a las autoridades competentes y no deberá considerarse que desalientan ni prohíben a las instituciones financieras o las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital hacer negocios con clientes legítimos.

4. A fin de facilitar la aplicación de las medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artículo, cada Estado parte notificará, según proceda, a las instituciones financieras, así como a las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital sobre las que tenga jurisdicción, a petición de otro Estado parte o por iniciativa propia, la identidad de determinadas personas físicas o jurídicas con respecto a cuyas cuentas se espera que dichas instituciones y organizaciones apliquen una vigilancia más rigurosa, además de las personas que las instituciones financieras, así como las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y moneda digital, puedan identificar de otra manera.

5. Cada Estado parte aplicará medidas para velar por que sus instituciones financieras, así como las organizaciones que realicen actividades relacionadas con la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, mantengan, durante un plazo conveniente, registros adecuados de las cuentas y transacciones relacionadas con las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo, los cuales deberán contener, como mínimo, información relativa a la identidad del cliente y, en la medida de lo posible, del beneficiario final.

6. Con objeto de prevenir y detectar las transferencias del producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, cada Estado parte aplicará medidas apropiadas y eficaces para impedir, con la ayuda de sus órganos reguladores y de supervisión, el establecimiento de bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación. Además, los Estados partes considerarán la posibilidad de exigir a sus instituciones financieras, así como a las organizaciones implicadas en actividades vinculadas a la circulación de activos financieros digitales y de moneda digital, que se nieguen a entablar relaciones de banca corresponsal con esas instituciones, o a continuar las relaciones existentes, y que se abstengan de establecer relaciones con instituciones financieras extranjeras que permitan utilizar sus cuentas a bancos que no tengan presencia real y que no estén afiliados a un grupo financiero sujeto a regulación.

7. Cada Estado parte considerará la posibilidad de establecer, de conformidad con su derecho interno, sistemas eficaces para revelar información financiera relativa a las personas respecto de las cuales exista información sobre su posible participación en delitos tipificados con arreglo a la presente Convención y establecerá sanciones adecuadas en caso de incumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo. Cada Estado parte considerará asimismo la posibilidad de adoptar las medidas que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes compartan esa información con las autoridades competentes de otros Estados partes, si ello es necesario para investigar o adoptar medidas con miras a recuperar el producto de delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.

Capítulo VII

Mecanismo de aplicación

[Opción 1: Artículo 94. Conferencia de los Estados Partes en la Convención]

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Partes en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados partes y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que apruebe la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará el reglamento y las normas que rijan las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.

4. La Conferencia de los Estados Partes concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:

a) facilitará las actividades de los Estados partes previstas en [los capítulos relativos a la criminalización, medidas procesales y aplicación de la ley, cooperación internacional, asistencia técnica y medidas preventivas] [los capítulos relativos a asistencia técnica y medidas preventivas] de la presente Convención, entre otras cosas fomentando la movilización de contribuciones voluntarias;

b) facilitará el intercambio de información entre los Estados partes sobre las modalidades y tendencias de la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y sobre prácticas eficaces para prevenir y combatir estos delitos, con excepción de la información que constituya un secreto de Estado con arreglo a la legislación de un Estado parte, así como para la restitución del producto del delito;

c) cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de prevenir y combatir la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades;

e) examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados partes;

f) formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación;

g) tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados partes con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados partes en la aplicación de la presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Partes.

6. Cada Estado parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Partes información sobre medidas legislativas, administrativas y de otra índole, así como sobre sus programas, planes y prácticas, dirigidos a aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Partes. La Conferencia de los Estados Partes tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados partes y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Partes.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Partes establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la Convención.]

[Opción 2: Artículo 94. Conferencia de los Estados Partes en la Convención]

1. Se establecerá una Conferencia de los Estados Partes en la Convención a fin de mejorar la capacidad de los Estados partes y la cooperación entre ellos para alcanzar los objetivos enunciados en la presente Convención y promover y examinar su aplicación.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Convención. Posteriormente se celebrarán reuniones periódicas de la Conferencia de los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que apruebe la Conferencia.

3. La Conferencia de los Estados Partes aprobará el reglamento y las normas que rijan las actividades enunciadas en el presente artículo, incluidas las normas relativas a la admisión y la participación de observadores y el pago de los gastos que ocasione la realización de esas actividades.

4. La Conferencia de los Estados Partes concertará actividades, procedimientos y métodos de trabajo con miras a lograr los objetivos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, y en particular:

a) facilitará las actividades de los Estados partes previstas en [los capítulos relativos a la criminalización, medidas procesales y aplicación de la ley, cooperación internacional, asistencia técnica y medidas preventivas] [los capítulos relativos a asistencia técnica y medidas preventivas] de la presente Convención, entre otras cosas fomentando la movilización de contribuciones voluntarias;

b) facilitará el intercambio de información entre los Estados partes sobre las modalidades y tendencias de la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y sobre prácticas eficaces para prevenir y combatir estos delitos, con excepción de la información que constituya un secreto de Estado con arreglo a la legislación de un Estado parte, así como para la restitución del producto del delito;

c) cooperará con organizaciones y mecanismos internacionales y regionales y organizaciones no gubernamentales pertinentes;

d) aprovechará adecuadamente la información pertinente elaborada por otros mecanismos internacionales y regionales encargados de prevenir y combatir la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], a fin de evitar una duplicación innecesaria de actividades;

e) examinará periódicamente la aplicación de la presente Convención por sus Estados partes;

f) formulará recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación;

g) tomará nota de las necesidades de asistencia técnica de los Estados partes con respecto a la aplicación de la presente Convención y recomendará las medidas que considere necesarias al respecto.

5. A los efectos del párrafo 4 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Partes obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados partes en la aplicación de la presente Convención por conducto de la información que ellos le faciliten y de los demás mecanismos de examen que establezca la Conferencia de los Estados Partes.

6. Cada Estado parte proporcionará a la Conferencia de los Estados Partes información sobre medidas legislativas, administrativas y de otra índole, así como sobre

sus programas, planes y prácticas, dirigidos a aplicar la presente Convención, según lo requiera la Conferencia de los Estados Partes. La Conferencia de los Estados Partes tratará de determinar la manera más eficaz de recibir y procesar la información, incluida la que reciba de los Estados partes y de organizaciones internacionales competentes. También se podrán considerar las aportaciones recibidas de organizaciones no gubernamentales pertinentes debidamente acreditadas conforme a los procedimientos acordados por la Conferencia de los Estados Partes.

7. En cumplimiento de los párrafos 4 a 6 del presente artículo, la Conferencia de los Estados Partes establecerá, si lo considera necesario, un mecanismo u órgano apropiado para apoyar la aplicación efectiva de la Convención.

Artículo 94 bis. Comisión Técnica Internacional

1. La Conferencia de los Estados Partes, con el fin de prestar asistencia a los Estados partes en el examen de la aplicación de la Convención, creará y establecerá una Comisión Técnica Internacional de Lucha contra la [Cibercriminalidad] [Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos].

2. La Comisión será un órgano permanente compuesto por 23 miembros y se constituirá atendiendo al principio de representación mixta: dos tercios de sus miembros representarán a la Conferencia de los Estados Partes y un tercio, a los órganos rectores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

3. Los miembros de la Comisión serán expertos con considerable experiencia directa en asuntos relacionados con las relaciones internacionales, el derecho internacional y penal, las tecnologías de las comunicaciones o investigaciones conexas pertinentes.

4. Los miembros de la Comisión ejercerán sus funciones por un período de cinco años y podrán ser reelegidos.

5. Los períodos de sesiones de la Comisión se convocarán al menos una vez al año en la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones o de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o en los lugares y fechas que designe o apruebe la Conferencia de los Estados Partes.

6. La Comisión elaborará su propio reglamento, sujeto a la aprobación de la Conferencia de los Estados Partes.

7. La Comisión evaluará los progresos tecnológicos realizados en el ámbito de la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

8. La Comisión, por conducto de la Conferencia de los Estados Partes, informará de los resultados de su trabajo a los Estados partes y a las organizaciones internacionales interesadas.]

[Opción 3: Artículo 94. Órgano de aplicación]

1. Los Estados partes, reconociendo la competencia de las Naciones Unidas en lo que respecta a la asistencia a los Estados Miembros en el cumplimiento de las obligaciones internacionales que les imponen los tratados internacionales a los fines de prevenir y combatir diversas formas de delincuencia, convienen en encomendar a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal las funciones que se le asignan con arreglo a la presente Convención.

2. A los efectos del presente capítulo:

a) Por “Comisión” se entiende la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal;

b) Por “Consejo” se entiende el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas;

c) Por “Asamblea General” se entiende la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Artículo 94 bis. Gastos de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

Los gastos de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal serán sufragados por las Naciones Unidas en la forma que decida la Asamblea General.

Artículo 94 ter. Examen de las decisiones y recomendaciones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

1. Las decisiones y recomendaciones aprobadas por la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en cumplimiento de las disposiciones de la presente Convención estarán subordinadas a la aprobación o modificación del Consejo Económico y Social o de la Asamblea General, de la misma manera que otras decisiones y recomendaciones de la Comisión.

2. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal se encargará de examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención, lo cual incluirá:

- a) exámenes de mitad del período sobre la aplicación, que se llevarán a cabo cada cinco años;
- b) exámenes ministeriales de alto nivel sobre la aplicación, que se llevarán a cabo cada diez años;
- c) un debate anual sobre la aplicación de los tratados como tema permanente del programa de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal.

Artículo 94 quater. Funciones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

1. La Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal tendrá autoridad para estudiar todas las cuestiones relacionadas con los objetivos de la presente Convención, mejorar la capacidad de los Estados Miembros para combatir la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos], y promover y examinar la aplicación de la presente Convención, y en particular:

- a) hacer recomendaciones para la aplicación de las disposiciones de esta Convención y el logro de sus propósitos, y en particular recomendar programas de investigación científica e intercambio de información de carácter científico o técnico; y
- b) acordar los métodos de aplicación con miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo, en particular a:
 - i) facilitar las actividades que realicen los Estados partes con arreglo a [los artículos relativos a la criminalización de] la presente Convención, entre otras cosas alentando la movilización de contribuciones voluntarias;
 - ii) facilitar el intercambio de información entre Estados partes sobre las modalidades y tendencias de la [ciberdelincuencia] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos] y sobre prácticas eficaces para combatirla;
 - iii) cooperar con las organizaciones internacionales y regionales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes;
 - iv) examinar periódicamente la aplicación de la presente Convención; y
 - v) formular recomendaciones para mejorar la presente Convención y su aplicación.

2. A los efectos del párrafo 1 b) iv) y v) del presente artículo, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal obtendrá el necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las dificultades encontradas por los Estados partes en aplicación de la presente Convención mediante la información que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de examen que establezca la Comisión.

3. Los Estados partes facilitarán a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal información sobre sus programas, planes y prácticas, así como sobre las medidas legislativas y administrativas adoptadas, para aplicar la presente Convención, según lo requiera la Comisión, y se alienta a los Estados Miembros que no sean partes en la presente Convención a que procedan de igual manera.

Artículo 94 quinquies. Información que han de suministrar los miembros de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal

1. Los Estados partes proporcionarán a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal la información que esta les solicite por considerarla necesaria y adecuada para el desempeño de sus funciones, y en particular:

a) un informe cada cinco años sobre la aplicación de la presente Convención en sus respectivos territorios;

b) el texto de todas las leyes y reglamentos que se hayan promulgado a lo largo del tiempo para poner en práctica la presente Convención;

c) la información relativa a casos o delitos contemplados en la presente Convención, por ejemplo, detalles de los casos que puedan ser de importancia debido al tipo de actividad realizada para la comisión del delito o a los métodos empleados por los delincuentes, sin perjuicio de la necesidad de los Estados partes de proteger datos delicados relativos a la aplicación de la ley y los derechos de las víctimas y los testigos.

2. Los Estados partes proporcionarán la información mencionada en el párrafo 1 del modo y en la fecha que fije la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y utilizando los formularios que ella indique.]

Artículo 95. Secretaría

1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de los Estados Partes en la Convención.

2. La Secretaría:

a) prestará asistencia a la [Conferencia de los Estados Partes] [Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal] en la realización de las actividades enunciadas en la presente Convención y adoptará las disposiciones y prestará los servicios necesarios para los períodos de sesiones de la [Conferencia de los Estados Partes] [Conferencia de los Estados Partes y la Comisión Técnica Internacional de Lucha contra la [Cibercriminología] [Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos]] [Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal] en lo que respecta a la presente Convención;

b) cuando se le solicite, ayudará a los Estados partes a facilitar información a la [Conferencia de los Estados Partes] [Conferencia de los Estados Partes y la Comisión Técnica Internacional de Lucha contra la [Cibercriminología] [Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos]] [Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal], según lo previsto en la presente Convención; y

c) velará por la coordinación necesaria con las secretarías de otras organizaciones internacionales y regionales pertinentes.

Capítulo VIII

Disposiciones finales

Artículo 96. Aplicación de la Convención

1. Cada Estado parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas que sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administrativas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la presente Convención.

2. Cada Estado parte podrá adoptar medidas más estrictas o severas que las previstas en la presente Convención a fin de prevenir y combatir la [cibercriminalidad] [utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos].

Artículo 97. Efectos de la Convención

1. Si dos o más Estados partes han celebrado ya un acuerdo o un tratado relativo a las cuestiones contempladas en la presente Convención, o han regulado de otro modo sus relaciones al respecto, o si lo hacen en el futuro, podrán asimismo aplicar el citado acuerdo o tratado, o regular sus relaciones de conformidad con él.
2. Con respecto a los Estados partes que sean miembros de una organización regional de integración económica, estos podrán aplicar, en sus relaciones mutuas, las normas de esa organización regional de integración económica y, por consiguiente, no aplicarán las disposiciones derivadas de la presente Convención.
3. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a otros derechos, restricciones, obligaciones y responsabilidades que competen a cada Estado parte en virtud del derecho internacional.

Artículo 98. Relación con los protocolos

1. La presente Convención podrá complementarse con uno o más protocolos.
2. Dichos protocolos se negociarán y aprobarán siguiendo las mismas normas de procedimiento y organización que se hayan aplicado para negociar y aprobar la presente Convención.
3. Para pasar a ser partes en un protocolo, los Estados o las organizaciones regionales de integración económica también deberán ser partes en la presente Convención.
4. Los Estados partes en la presente Convención no quedarán vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser parte en el protocolo de conformidad con sus disposiciones.
5. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán juntamente con esta, teniendo en cuenta la finalidad de esos protocolos.

Artículo 99. Solución de controversias

1. Los Estados partes procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación de la presente Convención mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados partes acerca de la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados partes, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados partes no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esos Estados partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados partes no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa reserva.
4. El Estado parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 100. Reservas

[De conformidad con las declaraciones formuladas por varios Estados Miembros en el tercer período de sesiones del Comité Especial, la necesidad de esta disposición y su contenido debería evaluarse después de que se haya alcanzado una etapa más avanzada en las deliberaciones sobre las disposiciones sustantivas del proyecto de convención.]

Artículo 101. Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados del [fecha] al [fecha] en [ciudad] ([país]) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas (Nueva York) hasta el [fecha].
2. La presente Convención también estará abierta a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado la presente Convención de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea parte en la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.

Artículo 102. Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el [trigésimo] [cuadragésimo] [quincuagésimo] [septuagésimo] instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe la presente Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado el [trigésimo] [cuadragésimo] [quincuagésimo] [septuagésimo] instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si esta es posterior.

Artículo 103. Modificación

1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor de la presente Convención, los Estados partes podrán proponer enmiendas y transmitir las al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados partes y a la Conferencia de los Estados Partes en la Convención para que la examinen y adopten una decisión al respecto. La Conferencia de los Estados Partes hará todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda.

Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados partes presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Partes.

2. Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo y viceversa.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados partes.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte noventa días después de la fecha en que este deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados partes que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados partes quedarán sujetos a las disposiciones de la presente Convención, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 104. Denuncia

1. Los Estados partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2. Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser partes en la presente Convención cuando la hayan denunciado todos sus Estados miembros.

3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al párrafo 1 del presente artículo entrañará la denuncia de sus protocolos.

Artículo 105. Depositario e idiomas

1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

2. El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado la presente Convención.